



Trujillo, 28 de Mayo de 2024

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR**

**VISTO:**

El expediente administrativo que contiene el recurso de apelación interpuesto por don **MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR** contra la Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG de fecha 15 de agosto del 2023, y;

**CONSIDERANDO:**

Con fecha 24 de julio del 2023, don MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR, ex trabajador de la Gerencia Regional de Agricultura, solicitó el reajuste de la bonificación personal contemplada en el Artículo 51° del Decreto Legislativo N° 276; 2) De las bonificaciones Especiales según los Decretos de Urgencia N° 090-96, 073-97 y 011-99, a partir del 01 de septiembre del 2001, la misma que debe ser calculada en cada oportunidad en función a la remuneración básica proporcional, que viene percibiendo el recurrente en la suma de S/. 50.00 Nuevos soles, según los años de servicios acumulados y de manera permanente, es decir considerando el reajuste de la remuneración principal previsto en el Artículo 2° el Decreto de Urgencia N° 105-2001, desde la fecha de vigencia de la citada norma, pago de devengados e intereses legales; otros, y;

Mediante Informe N° 000069-2023-GRLL-GGR-GRAG-OAD-LMTM de fecha 01 de agosto del 2023, se concluye que es improcedente lo solicitado por la administrada, el mismo que no es observado por la responsable de Personal;

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG de fecha 15 de agosto del 2023, se resolvió denegar la solicitud del reintegro de la remuneración básica, devengadas más intereses legales, interpuesto por don MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR sobre el reajuste de bonificación personal de conformidad con el Decreto de Urgencia N° 105-2001 y otros;

Mediante Acta de Notificación, de fecha 15 de agosto del 2023, se notificó a don MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR la Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG de fecha 15 de agosto del 2023;

El administrado mostrando su disconformidad interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG, de fecha 15 de agosto del 2023, que declara IMPROCEDENTE, lo solicitado por don MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR, pensionista del D.L. 20530, de la





Gerencia Regional de Agricultura la Libertad, sobre restitución del derecho de pago de la subvención de las 10 URP, en Fiestas Patrias, Navidad Escolaridad, y vacaciones derivadas, de las Resoluciones Ministeriales N° 00419-88 y N° 00420-88-AG, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución;

De la verificación del expediente administrativo, se aprecia que el escrito sobre Recurso Administrativo de Apelación, presentado por el administrado, cumple con requisitos de forma establecidos en el artículo 218°, 220° y 221° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

El recurrente manifiesta en su recurso impugnativo de Reconsideración, los argumentos siguientes: “Que, dentro del plazo de ley, al amparo del Art. 38.1 del TUO. De la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, Interpongo RECURSO DE APELACION contra la Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG, de fecha 15 de agosto del 2023, que deniega mi solicitud cuya sumilla es “RESTITUCION DE PAGO DE LA SUBVENCION DE 10 URP, POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD, ESCOLARIDAD, Y VACACIONES, OTORGADO MEDIANTE LA VIGENTE RESOLUCION MINISTERIAL N° 00420-88-AG”, por lo que SOLICITO sirva disponer SE ELEVEN LOS ACTUADOS AL SUPERIOR JERARQUICOI, a efecto QUE DECLARE PROCEDENTE MI RECLAMO”;

Analizando los actuados en el expediente administrativo, el punto controvertido en la presente instancia es determinar: Si corresponde al recurrente se incluya en su pensión de cesantía, el pago de una subvención equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y Vacaciones establecido en la Resolución Ministerial N° 420-88-AG, continua, pago de devengados desde la fecha de otorgamiento de su pensión e intereses legales;

Este superior jerárquico tomando en cuenta lo anteriormente indicado, expresa los argumentos siguientes; Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”; en este sentido, la actuación de la Autoridad Administrativa debe ceñirse dentro del marco de las normas, principios y parámetros legales que establece nuestro ordenamiento jurídico vigente, debiendo actuar sólo dentro de los límites y facultades que el propio marco normativo le impone;





Es decir, que la actuación de la Administración Pública solo y únicamente será posible respecto de aquello sobre lo cual le ha sido conferida potestades y atribuciones; de modo que, no puede modificar, derogar o inobservar normas vigentes respecto a un caso particular ni hacer excepciones no contempladas previamente en la normativa;

Así tenemos que, mediante Resolución Ministerial N° 0420-88-AG, de fecha 24 de agosto de 1988, se otorgó al personal del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de Investigación Agraria una subvención equivalente a 10 URP por Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y Vacaciones, dicho beneficio tuvo vigencia hasta el mes de abril del año 1992, según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0898-92-AG, de fecha 31 de diciembre de 1992, fecha en que el Ministerio de Agricultura declaró extinguida la vigencia de la precitada Resolución (N° 0420-88-AG/T);

De otra parte, mediante artículo 1° de la Resolución Suprema N° 129-95-AG, de fecha 26 de diciembre de 1995, se dispuso que la Resolución Ministerial N° 0898-92-AG, era de aplicación para todo el personal de las Direcciones Regionales Agrarias de los Gobiernos Regionales, dejando sin efecto todo acto administrativo derivado de la Resolución Ministerial N° 0420-98-AGP; por lo que, en el presente caso, tratándose de normas de carácter laboral, en estricta aplicación de la Teoría de los hechos cumplidos, la citada norma (Resolución Ministerial N° 0898-92-AG) se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes. En este sentido, las Resoluciones Ministeriales alegadas por el recurrente a la actualidad carecen de efectos retroactivos habiendo sido posible aplicarse sólo durante el periodo correspondiente entre el 31 de diciembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1992 (4 años de vigencia) considerando que a partir de mayo del año 1992 dichas normas ya resultaron inaplicables; no pudiendo el recurrente pretender de manera retroactiva beneficiarse de las bondades de dichas normas ya derogadas a la actualidad;

Asimismo, el tercer considerando de la Resolución Ministerial N° 0420-88-AG, establecía que: “Las subvenciones excepcionales antes expresadas deberán otorgarse con carga a la captación de Ingresos Propios u otras fuentes que no afecten al Tesoro Público”; sin embargo, con la Resolución Ministerial N° 0898-92-AG, del 31 de diciembre de 1992, se declaró que la Resolución Ministerial N° 0419-88-AG, tuvo vigencia únicamente hasta el mes de abril de 1992 debido a que a partir del 01 de enero de 1993, los Ingresos Propios del Gobierno Central constituyeron recursos del Tesoro Público. En el caso del Gobierno Regional La Libertad, las Fuentes de financiamiento actuales contemplan 5 clases: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos, Donaciones y Transferencias y, Recursos determinados,” contando a la fecha, la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, solamente con Recursos





Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, los mismos que están dirigidos a las metas y objetivos propios de la entidad;

En este sentido, estando los Ingresos Propios constituidos por los Recursos Directamente Recaudados, no resulta posible (tampoco por este motivo) efectuar el pago solicitado por el recurrente, máxime si dicha fuente de financiamiento está constituida como recursos del Tesoro Público; por lo que, amparar la pretensión del recurrente de una subvención equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y Vacaciones, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 420-88-AG implicaría una clara contravención a nuestro ordenamiento jurídico vigente;

Para mejor explicación, en el supuesto que le haya asistido al recurrente la subvención equivalente a 10 Unidades Remunerativas Públicas, ello pudo haber sido en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1988 y hasta el mes de abril de 1992, en cuyo caso, la acción derivada de obligaciones laborales dentro del régimen de la carrera administrativa, ya ha prescrito; pues conforme se precisa en la Resolución de Sala Plena N° 002-2012- SERVIR/TSC, de fecha 20 de diciembre de 2012 (precedente es de observancia obligatoria), el plazo de prescripción de diez (10) años establecido en el inciso 1) del artículo 2001º del Código Civil, rige para las acciones sobre derechos laborales relacionados con la remuneración y los beneficios sociales;

De otra parte, según los argumentos de apelación, la Negociación Colectiva fue la que dio origen al otorgamiento de la subvención equivalente a 10 URP; sin embargo, se está desconociendo que aquella tuvo por finalidad mejorar las condiciones de trabajo del servidor; y en este entendido, el artículo 44º del Decreto Legislativo N° 276 (de aplicación al momento de su suscripción) precisó: "Las Entidades Públicas están prohibidas de negociar con sus servidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema único de Remuneraciones que se establece por la presente Ley, es nula toda estipulación en contrario"; no siendo válidos los argumentos esgrimidos por el apelante;

En decir, dicha negociación colectiva, por mandato imperativo de la citada norma y por trasgredir disposiciones que interesan al orden público, resulta nula ipso iure (de pleno derecho), no requiriendo ser declarada dicha condición para alcanzar tal sanción; máxime, si el 2º párrafo del artículo 25º del Decreto Supremo N° 003-82-PCM (vigente al tiempo de suscripción del Acta de Negociación Colectiva) precisaba: " (...) Para que la fórmula de arreglo a que hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá contar, bajo responsabilidad con la opinión favorable de la Comisión Técnica, quien, conforme al artículo 28º del





mismo Decreto, deberá emitir una Resolución Administrativa aprobándola”. De ello se entiende que la petición que sustenta el Acta de Negociación Colectiva nunca fue presentada con las formalidades que imperativamente exigía el Decreto Supremo N° 026-82-JUS, y tampoco tal negociación colectiva nunca fue remitida a la Comisión Técnica para su aprobación, mucho menos, sobre ella, se ha expedido resolución aprobatoria; es decir, nunca existió dicha resolución de aprobación a la fórmula de arreglo propuesta, resultando inviable e ilegal el reconocimiento de la subvención de 10 URP estipuladas en la Resolución Ministerial N° 420-88- AG;

Cabe recalcar, que el artículo 103º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28389, establece que: "La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo, en materia penal cuando favorece al reo". A partir de dicha reforma Constitucional se ha adoptado la TEORÍA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS, que implica que, la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en vigor debiendo ser aplicada a toda situación subsumible en el supuesto de hecho; es decir, si se genera un derecho bajo una primera ley y luego de producir sus efectos (Resolución Ministerial N° 0419-88-AG7T, Resolución Ministerial N° 0420-88-AG o Negociación Colectiva) esa Ley es modificada por una segunda, a partir de la vigencia de esta nueva ley, los nuevos efectos del derecho se deben adecuar a ésta y ya no ser regidos más por la norma anterior bajo cuya vigencia se estableció el derecho de que se trate;

Siendo ello así, bajo el supuesto que durante la vigencia de la Resolución Ministerial N° 0420-98- AG/T y del documento denominado Negociación Colectiva (desde ya nula) los derechos del pensionista no se efectivizaron, ahora en la actualidad no podría exigirse su eficacia, por el simple hecho que no existen derechos adquiridos a favor de la recurrente debido a que nunca se hizo efectiva ninguna entrega de subvención equivalente a 10 URP; y ello, en razón a que su fuente de financiamiento debió ser con cargo al presupuesto que la entidad recaudase sin afectar el presupuesto del tesoro público; es decir, nunca fue percibida, por cuanto nunca se contó con el presupuesto correspondiente;

Si bien las sentencias judiciales alegadas por el apelante han otorgado derechos a algunos cesantes, éstas NO CONSTITUYEN PRECEDENTE VINCULANTE Y MENOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, para su aplicación a casos futuros, siendo que dicha situación se originó porque los referidos procesos judiciales fueron tramitados en época de pandemia y bajo los alcances del estado de emergencia nacional decretado por el Estado a consecuencia de la Covid 19, habiendo existido carente defensa jurídica por parte del Estado, a tal punto que, en muchos casos, ni siquiera ha existido un apersonamiento del titular de la defensa judicial estatal;





En esta misma línea normativa, la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece (en lo que corresponde al Tratamiento de las Remuneraciones, Bonificaciones, Asignaciones y demás beneficios del Sector Público) que las Escalas Remunerativas y Beneficios de toda índole, así como el reajuste de las Remuneraciones y Bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios, comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular de Sector. ES NULA toda disposición contraria, bajo responsabilidad; por lo que, bajo esta prohibición legal, tampoco resulta factible amparar la pretensión del recurrente;

Elo, concordante con el artículo 4° de la Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, que estableció “todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional”; así como con el artículo 6° de la Ley N° 31365, que PROHIBE expresamente a las entidades del nivel del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, igualmente prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos retribuciones, dietas y beneficios de toda índole;

Finalmente, de acuerdo al principio general del derecho que pregona: “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, al haberse desestimado las pretensiones principales corresponde también desestimar la pretensión accesorio de pago de intereses, máxime, si conforme al artículo 1242° del Código Civil, al no haberse reconocido el pago de las 10 URP, no se ha generado interés ni mora en el pago de los mismos; por lo que, dicho extremo también resulta ser infundado;

En definitiva, en estricta observancia de los principios de Legalidad y vigencia de la ley (en el tiempo y espacio), la pretensión del impugnante de otorgamiento y pago de una subvención equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y Vacaciones, establecida en la Resolución Ministerial N° 420-88-AG, más la continua e intereses legales, deben ser desestimada;

Que, en aplicación del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1, del inciso 1, del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y tomando en cuenta los argumentos anteriormente referidos, corresponde a este superior jerárquico, desestimar en todos sus extremos





el recurso impugnativo de apelación, de conformidad con el numeral 227.1 del artículo 227° del T.U.O. de la Ley precitada;

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N°157-2023-GRLL-GOB, de fecha 8 de febrero de 2023, el Gobernador Regional de La Libertad delega al Gerente General Regional diversas atribuciones y competencias, dentro de los cuales está comprendido los que resuelven recursos de apelación contra actos emitidos por las Gerencias Regionales;

En uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, estando al Informe Legal N° 028-2024-GRLL-GGR-GRAJ-JARB y con las visaciones de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por don **MÁXIMO REMIGIO ARANA ZALASAR** contra la Resolución Gerencial Regional N° 000476-2023-GRLL-GGR-GRAG de fecha 15 de agosto del 2023, que declaró improcedente la solicitud de reconocimiento y pago de la subvención equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y Vacaciones, dispuesta en la Resolución Ministerial N° 420-88-AG, más pago de continua, devengados e intereses legales; en consecuencia, **CONFÍRMESE** la recurrida en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA**, por lo que la presente podrá ser impugnada ante el Poder Judicial, mediante proceso contencioso administrativo, en el plazo de tres (3) meses, contados desde el día siguiente de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia Regional de Agricultura y a la parte interesada.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

Documento firmado digitalmente por  
**HERGUEIN MARTIN NAMAY VALDERRAMA**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

